

Santiago, diez de junio de dos mil veintidós.

Vistos:

En autos RIT N° I-7-2020, RUC N° 20-4-0279330-K, seguidos ante el Juzgado de Letras Colina, caratulados “TUBOS Y PLÁSTICOS TIGRE ADS DE CHILE LTDA. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO”, en procedimiento de aplicación general, sobre reclamación de multas administrativas impuestas por la resolución N° 4514/20/12, de fecha 11 de mayo del 2020, de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco.

Por sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la magistrada doña Andrea Teresa Coppa Hermosilla, rechazó el reclamo deducido.

Contra ese fallo la parte reclamante dedujo recurso de nulidad, fundando su arbitrio en dos causales de nulidad, **las que interpone de manera conjunta:** (i) causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción del inciso tercero del artículo 191 del mismo cuerpo normativo; y (ii) causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por la falta de vigencia del artículo 20 del Reglamento 969 del año 1933, aplicado al caso.

Solicita que se invalide el fallo recurrido, se dicte el correspondiente fallo de reemplazo, en el que se resuelva que se acoge el reclamo y se dejen sin efecto las multas impuestas, con costas.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.

Considerando:

Primero: En concepto de la recurrente era improcedente la fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo, de manera que la sentenciadora habría realizado una contravención formal del inciso tercero del artículo 191 del Código del Trabajo. En esa norma legal se impone un deber legal de abstención bajo el único requisito de que otro organismo facultado para fiscalizar la aplicación de las normas de higiene y seguridad se haya constituido con antelación. Enfatiza que en dicha norma no se hace distinción alguna respecto de la materia a fiscalizar. Sin embargo, en el



considerando 12° de la sentencia recurrida la jueza a quo asevera que “*es preciso mencionar que lo dicho únicamente se aplica cuando se trate de materias de competencia común*”, haciendo una distinción que la ley no señala, vulnerando de esta manera el principio de que si el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Resalta que el día 03 de marzo de 2020 la Secretaría Ministerial de Salud se constituyó en las instalaciones de la empresa para fiscalizar el accidente del trabajador verificado el 26 de febrero de 2020.

Por otro lado, afirma que en el considerando 13° del fallo se fundamenta la decisión en dos normas de carácter interno de la Dirección del Trabajo, la Orden de Servicio N°2 y el Manual de Procedimiento de Fiscalización, argumento que atenta de manera evidente contra la jerarquía de normas legales, toda vez que una ley -como es el Código del Trabajo-, tiene mayor rango que las normas internas de un servicio;

Segundo: De manera conjunta se denuncia otro error de derecho, porque no existe el fundamento legal de la Multa N° 1 (No registro de horas de ingreso y salida de un trabajador), ya que el Reglamento 969 del año 1933 se encuentra derogado. El fiscalizador actuante supuso infringidas las normas de los artículos 33 y 506 del Código del Trabajo con relación al artículo 20 del Reglamento 969 de 1933. El error está en suponer que la norma contenida en el artículo 33 del Código del Trabajo (antiguo artículo 32 de la Ley N°18.620 y 44 del Decreto Ley N°2.200) requiere de un Reglamento para su aplicación. El texto del artículo 3° transitorio del Código del Trabajo es claro, en el sentido que las disposiciones reglamentarias vigentes a la fecha de su entrada mantendrán su vigencia, en todo lo que fueren compatibles, hasta el momento en que comiencen a regir los nuevos reglamentos. Es decir, sólo se mantienen vigentes las disposiciones reglamentarias que regulan materias que deben ser regidas por futuros reglamentos y únicamente mientras estos futuros y nuevos reglamentos no se dicten.

Agrega que en el inciso primero del artículo 134 del Código del Trabajo del año 1948, se establecía que: “*El empleador pagará las horas extraordinarias de trabajo con un recargo de cincuenta por ciento, calculado en la forma*



que determine el reglamento”. Indica que, al dictarse el Decreto Ley N°2.200, esta norma fue reemplazada por el artículo 43 del referido cuerpo legal el que, luego de ser el artículo 31 de la Ley 18.620, ha pasado con idéntica redacción a ser el actual artículo 32 del Código del Trabajo. Precisa que en el antiguo artículo 134 del Código del Trabajo la forma de cálculo del pago de horas extraordinarias quedaba sujeta a la forma que determinara el “Reglamento”, que no era otro que el Decreto Supremo N°969, del año 1933, denominado “Reglamento para la aplicación del Título IV del Libro I del Código del Trabajo”. Esta referencia al “Reglamento” fue eliminada en el Decreto Ley 2.200, al igual que en los sucesivos cuerpos legales, transformándolos en una norma no dependiente del Reglamento N°969, el cual, por conclusión, ha quedado sin efecto al no estar pendiente la dictación de un nuevo reglamento sobre la misma materia.

Señala que tanto es así, que la misma Dirección del Trabajo ha regulado mediante el Oficio Circular N°4, del 15 de mayo de 1987 la forma de realizar el cálculo simplificado de horas extraordinarias, el cual no hubiere tenido razón de ser ni hubiese sido legalmente posible de haberse encontrado vigente, el Reglamento N°969 ya que tratan la misma materia pero de manera distinta;

Tercero: Con miras a propiciar la adecuada comprensión del asunto, resulta aconsejable y necesario reseñar los hechos imputados en la Resolución Administrativa N° 4514/20/12, que impusiera las 3 multas objeto de la reclamación:

1.- Multa 1 (40 UTM): No llevar correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas, al no consignar la hora de ingreso en determinados días y la hora de salida, en otros días, respecto del trabajador Inostroza Torres;

2.- Multa 2 (40 UTM): No informar a ese mismo trabajador sobre los riesgos que entrañaban sus labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correctos, toda vez que no se cuenta con las capacitaciones en un procedimiento de trabajo seguro;

3.- Multa 3 (100 UTM): No informar inmediatamente a la inspección del trabajo el accidente grave que afectara a dicho trabajador;



Cuarto: En su sentencia la jueza a quo desestima la reclamación judicial por las razones que pasan a ser reseñadas:

1.- Multa 1: Se expresa que el sentido del artículo 191.3 del Código del Trabajo es evitar la duplicidad de funciones e investigaciones sobre un mismo asunto y propende a evitar la imposición de sanciones diversas con motivo de una misma infracción. Por ende, el deber de abstención se aplica cuando se trata de materias de competencia común, de manera que quedan excluidas de esa limitante aquellas materias que son de competencia exclusiva de cada uno de los entes fiscalizadores;

2.- Multa 2: Se concluye su vigencia, porque la regla del artículo 20 del Reglamento 969, no resulta incompatible con la regulación que se contiene en los actuales artículos 33 y 506 del Código del Trabajo;

3.- Multa 3: Se estableció que la reclamante no desvirtuó los fundamentos de hecho de la infracción cursada;

Quinto: En lo que atañe al primero de los errores de derecho o infracciones de ley denunciadas en el recurso, esto es, lo referido al deber de abstención que pesaría respecto de la Inspección del Trabajo, ha de recordarse que la norma legal concernida dispone lo siguiente:

“Cada vez que uno de los servicios facultados para fiscalizar la aplicación de normas de higiene y seguridad, se constituya...los demás servicios deberán abstenerse de intervenir respecto de las materias que están siendo fiscalizadas, en tanto no se haya dado total término al respectivo procedimiento...”;

Sexto: Tal como se expresa en el fallo que se revisa, el sentido final de la norma transcrita apunta a evitar la sobreabundancia en la intervención de la autoridad administrativa y con ello impedir de paso el doble enjuiciamiento y hasta la eventual duplicidad de sanciones, por un mismo hecho constitutivo de una misma y única infracción. Si se trata de literalidad, la clave para delimitar el alcance de ese deber de abstención está dado por el enunciado compuesto por la frase *“respecto de las materias que están siendo fiscalizadas”*, con lo que se ha querido dar a entender que debe tratarse de asuntos en que pueda existir una confluencia de atribuciones respecto de un mismo hecho. Acá, los aspectos que fueron fiscalizados u objeto de revisión por parte de la Inspección del Trabajo tuvieron que ver



con el registro de la jornada de trabajo, la capacitación del trabajador en un procedimiento de trabajo seguro y el hecho –objetivo por lo demás-, de no haberse dado aviso a dicho servicio de la ocurrencia del accidente, vale decir, extremos de indudable connotación laboral los que, como tales, son de exclusiva competencia del aludido órgano de la Administración.

En suma, no existe el error de derecho denunciado;

Séptimo: Ahora bien, en lo que concierne a la invocación en el fallo a la Orden de Servicio N°2 y al Manual de Procedimiento de Fiscalización, aparte de no comportar ningún ataque a la jerarquía normativa, es evidente que se trató de un argumento a mayor abundamiento que no determinó la decisión, la que sí estuvo apoyada y sustentada a cabalidad en la correcta comprensión que se hiciera de la citada regla del artículo 191 inciso tercero del Código del Trabajo;

Octavo: Respecto de la segunda causal de nulidad o segundo capítulo de impugnación, ha de señalarse que –en términos de tipificación-, el verdadero soporte de la multa aplicada está constituido por los artículos 33 y 506 del Código del Trabajo, en términos que la derogación o vigencia del Reglamento 969 de 1933 carece de toda relevancia para estos fines;

Noveno: En efecto, es un hecho -que ni siquiera fue materia de discusión-, que la empleadora sencillamente no registró las horas de ingreso del trabajador en los días 10/08/2019, 08/09/2019, 11/11/2019, 04/11/2019, 20/01/2020, 17/02/2020, 25/02/2020 y que tampoco se tomó nota de las horas de salida de ese mismo trabajador en los días 06/08/2019, 09/11/2019, 23/01/2020. Merece la pena remarcarlo, acá no está en debate la forma de llevar el registro, si con un libro, con reloj control, tarjeta u otro sistema semejante. Se trata, simplemente, de su ausencia. Y eso, a la luz del artículo 33 del Código del Ramo, implica que no se cumplía con el deber de control que impone dicha norma legal. Ese es el deber de conducta incumplido. Ahora, en cuanto a la sanción, no es otra que la prevista en la norma general que contempla el artículo 503 del mismo Código. Por consiguiente no existe ningún reparo de legalidad que pueda sostenerse en la materia.



Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, **se rechaza, con costas**, el recurso de nulidad deducido por la parte reclamante, contra la sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de Colina, recaída en la causa RIT I-7-2020.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Astudillo.

No firma el ministro señor Fernando Carreño, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por estar con feriado legal.

Nº Laboral-Cobranza 2381-2021.



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Lilian A. Leyton V. Santiago, diez de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a diez de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

